



Universidad
Zaragoza



TRABAJO DE FIN DE MASTER

Dictamen elaborado por

Alba Molina Montero

Con objeto de analizar las estrategias de defensa
frente a la acusación por un delito de cooperación al
suicidio.

Dirigido por

Teresa Piconto.

Facultad de Derecho

Diciembre de 2019.

ÍNDICE

I.	LISTADO DE ABREVIATURAS.....	3
II.	INTRODUCCIÓN	4
III.	ANTECEDENTES DE HECHO	5
IV.	CONSIDERACIONES JURÍDICAS A RESOLVER	8
	1.- JUZGADO COMPETENTE	8
	2.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS	8
V.	NORMATIVA APLICABLE	9
VI.	FUNDAMENTOS JURÍDICOS	12
	1.- ATRIBUCIÓN DEL CASO AL JUZGADO COMPETENTE.....	12
	2.- CALIFICACIÓN DEL TIPO DELICTIVO DEL DELITO DE COOPERACIÓN AL SUICIDIO.....	18
	2.1.- Tipo básico.....	18
	2.2.- Atenuantes.....	21
	3.- ARGUMENTOS QUE PROPONEMOS ESGRIMIR EN DEFENSA DEL ACUSADO.....	25
	3.1. El derecho a la libertad individual, a la dignidad e integridad de la persona, así como el derecho a la disponibilidad de la propia vida.	25
	3.2.- La despenalización del suicidio en relevancia con la imposibilidad física de causar tu propia muerte y la importancia del dominio del hecho.....	29
	3.3.- Pietatis Causa. Deber ético y moral de ayudar a su mujer.....	32
	3.4.- Proyecto de Ley sobre la aprobación de la Eutanasia.....	37
VII.	CONCLUSIONES	39
VIII.	BIBLIOGRAFÍA	42

I. LISTADO DE ABREVIATURAS

- ❖ **LO.-** Ley Orgánica
- ❖ **Art.-** Artículo
- ❖ **LOPJ.-** Ley Orgánica del Poder Judicial
- ❖ **LMPIVG.-** Ley de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género
- ❖ **STS.-** Sentencia del Tribunal Supremo
- ❖ **CP.-** Código Penal
- ❖ **SUMMA.-** Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid.
- ❖ **SAP.-** Sentencia de la Audiencia Provincial
- ❖ **TC.-** Tribunal Constitucional

II. INTRODUCCIÓN

Se trata de un caso conocido públicamente en el que los hechos se han extraído de los “mass media” contrastados entre sí, para que los mismos sean lo más veraces y próximos a la realidad, y de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 1891/2019, de 6 de junio, donde se suscita la cuestión sobre cuál es el juzgado competente para este caso, de forma que se preserva la identidad de las personas implicadas así como los demás hechos relevantes para el presente caso, y sin más precedente,

Se emite Dictamen a petición de mi cliente, el acusado Ángel Hernández, con el objetivo de defender al procesado por la imputación de los hechos ocurridos el día 3 de abril de 2019 en su domicilio, sito en la calle Federico Carlo Sanz de Robles de Madrid.

Defendiendo al Sr. Hernández y en contraposición al escrito de calificación presentado por el Ministerio Fiscal, la defensa entiende que estos hechos no pueden ser imputables al acusado por lo que se expondrá a continuación.

Por otra parte, se remite el caso al Juzgado de Violencia sobre la mujer, a lo que esta parte se opone por entender que el mismo no es el competente para conocer del presente procedimiento.

Para la elaboración del presente dictamen se ha llevado a cabo un estudio de la materia, junto a un análisis normativo y jurisprudencial, así como el estudio en profundidad del caso concreto.

III. ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Doña María José Carrasco de 61 años de edad, casada con Ángel Hernández, fue diagnosticada de esclerosis múltiple degenerativa en el año 1989, desde entonces sufrió brotes repetidos con una frecuencia de una a dos veces al año, debiendo jubilarse de su antiguo puesto de trabajo como Secretaria Judicial en el año 1996, cuando se le declaró “una gran invalidez”.

SEGUNDO.- En el año 1999, aproximadamente, la Sra. Carrasco tuvo un intento de suicidio, a causa de su enfermedad, encontrándose en el domicilio familiar tirada en el suelo, salvándole este la vida llamando inmediatamente al personal sanitario, y prometiéndole que llegado el momento en que ella fuera totalmente dependiente y ya no pudiera soportar más el dolor que le acarreaba su enfermedad, si fuera necesario, él le ayudaría a tener una muerte digna.

TERCERO.- Que ambos eran fuertes defensores de la eutanasia, perteneciendo ambos a la Asociación Muerte Digna desde hace uno cuatro o cinco años, y así lo manifestaron en reiteradas ocasiones, solicitando la eutanasia como un derecho de libre elección de toda persona que arrastre una enfermedad irreversible que le produzca una existencia de dependencia y sufrimiento que no desea, considerando que los cuidados paliativos no son una alternativa a la eutanasia, sino que las dos opciones deben de coexistir.

CUARTO.- Que en 2009 se le reconoció a Doña María José el grado máximo de dependencia, presentando una incapacidad del 100%, debido a la esclerosis múltiple degenerativa con secuelas, y estando los últimos años de su vida bajo cuidados paliativos tomando morfina, siendo totalmente dependiente de su marido para todos los actos de la vida, pues se encontraba en fase terminal, prácticamente paralizada, precisando una grúa para poder moverse, con problemas de atrofia y debilidad muscular en todo su cuerpo, fatiga, incontinencia, problemas de visión, dificultades en el habla y problemas con la ingesta de alimentos y líquidos, sumida en fuertes e insoportables dolores.

QUINTO.- La Sra. Carrasco llevaba años comunicándole a su marido su deseo de morir a causa de no aguantar más el sufrimiento acaecido por su enfermedad, pidiéndole de forma casi diaria y reiterada, desde hace unos cinco meses, que le ayudara a poner fin a su vida, ya que ella por sí misma no podía disponer de los medios necesarios para hacerlo, al ser una persona totalmente dependiente, tratando el Sr. Hernández de dilatar el problema al pensar que se aprobaría la ley de eutanasia.

SEXTO.- Que el pasado 2 de abril de 2019, el Sr. Hernández grabó un video junto con su mujer en el salón del domicilio de ambos, sito en la calle Federico Carlo Sanz de Robles de Madrid, donde se ve como le pregunta a la Sra. Carrasco si sigue “con la idea de suicidarse”, a lo que ella contesta que “sí”, preguntándole de nuevo “sabes que te tengo que ayudar yo” contestando ella “sí, cuanto antes mejor”. Finalmente le pregunta si quiere que prepare todo para el día siguiente, respondiendo la misma de manera afirmativa y manifestando el Sr. Hernández que lo único que le preocupa es que su mujer se atragante y no pueda tragar el líquido por su problema de ingesta de alimentos y líquidos, pudiendo complicarse la situación.

SÉPTIMO.- Que el 3 de abril de 2019 acude el SUMMA al domicilio familiar sobre las 15:00 horas, constatando la muerte de Doña María José, reconociendo el Sr. Hernández en todo momento que fue él quien le suministró 100 ml de pentobarbital sódico, sustancia que compró su esposa, hace dos o tres años por internet, cuando se manejaba con las manos. Entregándole el Sr. Hernández a las autoridades un video que grabó del momento de los hechos acaecidos, y el mencionado con anterioridad donde la Sra. Carrasco manifiesta su voluntad de morir, concluyendo que todo lo que hizo fue por el bienestar y deseo de su mujer.

En el video se ve a la Sra. Carrasco postrada en la cama, diciéndole el Sr. Hernández que el solo le va a prestar sus manos para ayudarle a morir. Primero se ve como le acerca un vaso de agua con una pajita para ver si puede tragar sin problemas y después le pregunta de nuevo si está decidida a morir, a lo que contesta ella que “sí”. Entonces le acerca el vaso que contiene pentobarbital sódico, prestándole sus manos para llevar el vaso hacía ella, bebiendo la Sra. Carrasco, con ayuda de una pajita, por sus propios medios del mismo, siendo plenamente consciente de las consecuencias que ello implica y con plena voluntad, falleciendo media hora más tarde.

OCTAVO.- El Sr. Hernández es detenido y puesto en libertad por el juez sin medidas cautelares, dando traslado del caso al Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid, el cual suscita cuestión de competencia negativa en Diligencias Previas, considerando que debe de conocer el caso el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, dando traslado al Ministerio Fiscal y a las demás partes personadas para que emitan informe al respecto.

NOVENO.- Por auto dictado por el Juzgado de Instrucción núm. 25 de Madrid, con exposición razonada de de la Magistrada, se eleva cuestión de competencia negativa a la Audiencia Provincial, contra la resolución dictada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 de esta Capital, que en resolución rechazó la inicial inhibición planteada por aquel Órgano Jurisdiccional para el conocimiento de los hechos objeto de investigación.

DÉCIMO.- Atribuyendo definitivamente la Audiencia Provincial de Madrid en la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 1891/2019, de 6 de junio, la competencia al Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 de Madrid, sin haber recurso alguno contra la presente sentencia.

IV. CONSIDERACIONES JURÍDICAS A RESOLVER

1.- JUZGADO COMPETENTE

Nos encontramos ante un caso en el que se acusa a nuestro representado, Ángel Hernández, de un delito de cooperación al suicidio de su esposa, María José Carrasco. Por lo que en un primer momento, al posicionarse la Sra. Carrasco como víctima y estar unidos por una relación sentimental, el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid decidió remitir el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

Cuestión que precisa de un mayor análisis, ya que se observa que únicamente se remite a este Juzgado por darse el supuesto delito entre un hombre y una mujer, sujetos por una relación sentimental, donde aparentemente se posiciona la mujer como víctima al poner fin a su vida, debiendo de valorarse, a este parecer, otros aspectos del caso que deberán de ser tenidos en cuenta y estudiados con detenimiento, como haremos en el presente dictamen, para la correcta asignación del caso al juzgado competente.

La correcta asignación del caso al tribunal competente es esencial para el óptimo desarrollo del proceso judicial, siendo relevante tanto para el caso concreto que nos ocupa como para el acusado. Y pese a que en este supuesto la Audiencia Provincial ya ha dictaminado que el juzgado competente sería el de Violencia sobre la mujer, esta parte se opone y se muestra disconforme con tal atribución.

2.- CALIFICACIÓN DE LOS HECHOS

Una vez determinado el juzgado competente para esta parte, se procederá en el presente dictamen a analizar el tipo delictivo del delito de cooperación al suicidio previsto en el artículo 143 del Código Penal, especialmente su apartado cuarto, por el que se le acusa a mi representado, así como todos los atenuantes que le serían de aplicación si le condenarán por este tipo delictivo, siendo necesario hacer este estudio previo para entender el tipo delictivo del que se le acusa.

Esgrimiendo a continuación todos los argumentos de defensa que esta parte entiende se dan en el presente caso y en virtud de los mismos se manifiesta que Don. Ángel es inocente y procede su libre absolución, haciendo aporte de la correspondiente prueba filmográfica, donde aparecen grabados los hechos acaecidos.

V. NORMATIVA APLICABLE

Para la resolución de las cuestiones jurídicas planteadas se debe acudir a la siguiente normativa:

- a) Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978.
 - Artículo 9.2.
 - Artículo 10.
 - Artículo 15. Derecho a la vida y a la integridad física y moral.
 - Artículo 17.2.

- b) Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 - Artículo 21.4, como atenuante de confesión.
 - Artículo 23, como circunstancia mixta de parentesco.
 - Artículos 27, 28 y 29, en concepto de autor y cómplice.
 - Artículo 66.1.2^a, en aplicación a la pena cuando concurren circunstancias atenuantes y no concurra agravante alguna.
 - Artículo 80, relativo a la suspensión de la pena.
 - Artículo 143, como tipo delictivo del delito de inducción al suicidio, considerando especialmente el apartado cuarto del mismo para el presente caso.

- c) Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio del Poder Judicial.
 - Artículo 87. Competencia de los Juzgados de Instrucción.
 - Artículo 87 bis. Organización territorial.
 - Artículo 87 ter. Competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.

- d) RD de 14 de septiembre de 1882, aprobatorio de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
 - Artículo 14. Competencias en el orden penal.
 - Artículo 15. Competencia territorial.

- e) Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género.
 - Artículo 1. Objeto de la ley.
 - Artículo 43. Organización territorial.
 - Artículo 44. Competencia.
 - Artículo 58. Competencias en el orden penal.

- f) Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, 88, de 7 de mayo de 2010.

- g) Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte, Boletín Oficial de Aragón, 70, de 7 de abril de 2011.

- h) Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte, BON, 65 de 4 de abril de 2011.

- i) Ley 1/2015, de 9 de febrero, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida, BOE, 54, de 4 de marzo de 2015.

- j) Ley 4/2015, de 23 de marzo, de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso de Morir, BOE, 96, de 22 de abril de 2015.

- k) Ley 5/2015, de 26 de junio, de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas Enfermas Terminales, DOG, 133, de 16 de julio de 2015.

- l) Ley 11/2016, de 8 de julio, de Garantía de los Derechos y de la Dignidad de las Personas en el Proceso Final de su Vida, Boletín Oficial del País Vasco, de 16 de julio de 2016.

m) Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir, BOCM, de 22 de marzo de 2017.

Además, es de aplicación al presente caso y a tener en cuenta en este dictamen la siguiente jurisprudencia, que se ha extraído de las siguientes bases de datos: Thomson Reuters Aranzadi, Centro de Documentación Judicial y de la página web del Tribunal Constitucional del España.

- SAP Madrid, 1891/2019, de 6 de junio.
- SAP Zaragoza 85/2016, de 19 de abril.
- SAP Girona 184/2001 de 23 de marzo.
- SAN 95/2018, de 5 de junio.
- STC 242/1998, de 11 de noviembre.
- STS 677/2018, 20 de diciembre.
- STS 1177/2009, de 24 de noviembre.
- STS 384/1986, de 15 de marzo.
- STS 2031/1994, de 23 de noviembre.
- STS 147/2004, de 6 de febrero.
- STS 708/2014, de 6 de noviembre.
- STS 320/2003, de 13 de marzo.

VI. FUNDAMENTOS JURÍDICOS

1.- ATRIBUCIÓN DEL CASO AL JUZGADO COMPETENTE.

La asignación del caso a su juzgado competente dentro del ámbito de la competencia objetiva y territorial es esencial para el correcto desarrollo del proceso judicial para que ninguna de las partes que integra el mismo vea mermados sus derechos y preservar así los principios procesales comunes de nuestra jurisdicción.

En el caso que nos ocupa, se observa como de manera automática el Juzgado de Instrucción número 25 de Madrid decide inhibirse a favor del Juzgado de Violencia sobre la Mujer, al considerarlo como un acto de violencia de un hombre hacia su mujer estando ligados por una relación conyugal y de pareja¹.

El Juez del Juzgado de Instrucción de Madrid aplicó para ello la Sentencia del Tribunal Supremo 677/2018 de 20 de diciembre de 2018 donde se establece que cualquier acto de violencia que ejerce el hombre sobre la mujer con ocasión de la relación afectiva de pareja es un hecho constitutivo de violencia de género, “con independencia de cuál sea la motivación o la intencionalidad”. A lo que esta parte se opone, considerando además, que la interpretación jurisprudencial que se hace no se ajusta a este caso y no se presta la debida atención a los hechos que se juzgan, siendo jurídicamente discutible la decisión que se toma, ya que hay muchos más factores objeto de estudio que el simple hecho de estar ante una relación sentimental entre un hombre y una mujer. Entendiendo esta parte que la atribución a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer nunca puede ser automática y como mínimo deben de existir indicios de que los hechos vayan aparejados a una situación de violencia de género, o dentro de un contexto en el que se haya suscitado la misma.

Para comenzar, esta parte entiende que se debe de prestar atención a la intencionalidad de los actos y no atender únicamente al hecho de que el Sr. Hernández ayudó a morir a su mujer viéndolo como un acto de violencia del acusado hacia la misma, sino todo lo contrario, pues tras estar cuidando y atendiendo a su mujer durante

¹ Véase la Sentencia de la Audiencia Provincial 1891/2019, de 6 de junio, en la que se cuestiona la competencia del Juzgado competente del presente caso.

más de 30 años, su única intención era ofrecerle una muerte digna, y que descansara por fin en paz, como ella tantas veces le había pedido.

Por lo que nos encontramos ante unos hechos que distan mucho de estar en un contexto de violencia machista, lejos de todo signo de violencia, superioridad o maltrato físico o psicológico por parte del Sr. Hernández, y observando que nos encontramos ante una relación entre un hombre y una mujer en condiciones de plena igualdad y, no solo eso, también ante un marido que vela por el bienestar de su mujer.

La propia Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de género establece que tiene por objeto actuar contra la violencia que tenga como manifestación la discriminación, desigualdad y relación de poder que ejerza el hombre sobre la mujer que sea o haya sido cónyuge o de quienes estén o hayan estado ligados por una relación similar de afectividad. Comprendiendo dentro de la violencia de género “todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones sexuales, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de la libertad”².

Así cabría afirmar, sin ánimo exhaustivo, que las distintas manifestaciones de violencia contra la mujer, que tienen cabida en esta Ley, pueden reconducirse a los siguientes³ actos de violencia:

- Violencia física: relativa a cualquier acto de fuerza contra el cuerpo de la mujer, con resultado o riesgo de producir lesión física o daño en la víctima.
- Violencia sexual: referida a la imposición por la fuerza de relaciones o prácticas sexuales que atenten contra su libertad sexual.

² L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. Artículo 1: 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a las mujeres, a sus hijos menores y a los menores sujetos a su tutela, o guarda y custodia, víctimas de esta violencia. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad.

³ Circular 4/2005, de 18 de julio, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género.

- Violencia psicológica: comprensiva de toda conducta que produzca en la víctima desvalorización o sufrimiento, sea a través de insultos, amenazas, control, aislamiento, anulación, humillaciones o vejaciones, limitación de la libertad, exigencia de obediencia o sumisión. La violencia psicológica, entendida en un sentido amplio, comprende también aquellas manifestaciones de la violencia contra la mujer que, en algunas clasificaciones son objeto de concepción autónoma, tales como las llamadas violencia económica - entendida como abuso económico o la privación o discriminación intencionada y no justificada de recursos- o espiritual, comprensiva de aquellas conductas dirigidas a obligar a aceptar un sistema de creencias cultural o religioso determinado o destruir las creencias de otro.

En el caso de la Sra. Carrasco no se aprecia violencia de ningún tipo: ni sexual, ni psicológica, ni física. No debiendo de confundir su muerte con un acto de violencia física, ya que se produjo por voluntad de la misma, expresada de forma seria e inequívoca, debiendo auxiliarle su marido a petición de esta, por padecer la Sra. Carrasco una enfermedad que le incapacitaba para desarrollar por si misma todos los actos de vida, siendo totalmente dependiente, y por lo tanto, no pudiendo culminar tal acto de manera autónoma. Por lo que no se deben de descontextualizar los hechos, y atender únicamente al momento de la muerte, sino que se debe de abarcar la intencionalidad y voluntad de la supuesta víctima, ya que para ella la muerte era entendida como una liberación de su enfermedad y los fuertes e insoportables dolores que le ocasionaba.

Por lo tanto, en el caso de la Sra. Carrasco no se ve vulnerado su derecho a la igualdad, a la no discriminación por razón de su sexo, a la dignidad o al libre desarrollo de su personalidad en el ámbito de pareja, como sucede en los casos de violencia de género, sino todo lo contrario. Su marido le ayudó a morir dignamente a petición suya, sin apreciar en ningún momento signo alguno de discriminación, desigualdad o relación de poder de éste hacía su mujer, siendo su única intención que su mujer dejara de sufrir, porque tal y como llevaba tiempo diciéndole ya no aguantaba más viviendo de esa forma, prueba de ello son los videos que se presentan como prueba en donde se aprecian los hechos y la relación que mantenían ambos.

Además, está claro que lo que interesa que se juzgue en este caso es si se le puede exigir al Sr. Hernández responsabilidad penal por haber ayudado a morir a su esposa, y no si la Sra. Carrasco ha sufrido violencia de género ya que en ningún momento se aprecian conductas machistas, careciendo de sentido que el juez que juzgue al Sr. Hernández sea el de Violencia pues no se observa atisbo alguno de la misma.

Dicho lo cual, entendemos que el tribunal competente para conocer el caso en fase de instrucción es el Juzgado de instrucción de Madrid, según el artículo 87.1.a) de la Ley Orgánica del Poder Judicial, donde se establece que conocerá de la *“instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer”*.

En relación con el mismo, el art. 87 ter. de la LOPJ y el art. 44 de la LMPIVG establecen en su apartado primero punto a), que corresponderá a los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, en el orden penal, conocer *“de la instrucción de los procesos para exigir la responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos al homicidio(...)cuando también se haya producido un acto de violencia de género”*. Y como se ha podido comprobar no existe indicio alguno de que los hechos se hayan producido en un contexto de violencia de género, ni se puede considerar a la Sra. Carrasco como víctima de la misma, sino que su muerte está ligada totalmente a su enfermedad y al no poder aguantar más el sufrimiento que le producía la misma, estando muy lejos de encontrarse en una relación discriminatoria por razón de género.

Además es de aplicación el art. 14.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 14 LMPIVG), en virtud del cual conocerá el Juzgado de Instrucción para la instrucción de la causa y para el conocimiento y fallo del delito que se le acusa en fase de enjuiciamiento el Juzgado de lo Penal de Madrid (art. 15 LECrim).

De esta manera la STS 677/2018, de 20 de diciembre, establece *“que no había que acreditar dolo específico, pero que se puede excluir si hay causas para ello. La violencia de género no es automática”*. No pudiendo asignarse de manera automática los casos al Juzgado de Violencia sobre la Mujer solo porque sea un delito recogido en el art 87 ter. LOPJ, comprendido en una relación de pareja en el que la víctima sea una mujer, pudiendo abstenerse este tribunal de conocer en según qué casos cuando resulte evidente y haya pruebas suficientes de que no se cometió dicho delito en un contexto de violencia machista, como es este supuesto en el que no se aprecia violencia alguna y existe voluntariedad por parte de de la Sra. Carrasco, debiendo de valorar cada caso.

Ya que como establece la STS 1177/2009, de 24 de noviembre: *“no toda acción de violencia física en el seno de la pareja del que resulte lesión leve para la mujer, debe considerarse necesaria y automáticamente como la violencia de género (...), sino sólo y exclusivamente -y ello por imperativo legal establecido en el art. 1.1 de esa Ley- cuando el hecho sea "manifestación de la discriminación, de la situación de desigualdad y de las relaciones de poder del hombre sobre la mujer (...)"*. Sin poder, por lo tanto, considerar este caso como violencia de género, al no apreciar discriminación alguna.

Así lo entendió la Magistrada del Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 en su auto, como se hace constar en la SAP 1891/2019, de 6 de junio, considerando que: *“el art. 87.1 a) Ter apartado cuarto LOPJ, determinaba que, si el Juzgado apreciará que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituían una expresión de violencia de género, podría inadmitir la pretensión, remitiéndola al Órgano Judicial competente”*. Considerando que no existía ningún tipo de violencia contra la mujer, según lo dispuesto en el art. 143.3 CP, al señalar que, el comportamiento sancionado penalmente en el indicado precepto penal, consistía en llevar a cabo la voluntad de la Sra. Carrasco, expresada de manera seria e inequívoca, de auxiliarle para poner fin a su vida, por padecer una enfermedad permanente, difícil de soportar, quien había solicitado la ayuda para ejercer el derecho a poner fin a su vida porque debido a su enfermedad no podía hacerlo de manera autónoma. Considerando el elemento esencial para excluir esta conducta de la competencia de los Juzgados especializados la petición seria e inequívoca de la Sra. Carrasco a su marido.

Igualmente, el Ministerio Fiscal⁴ consideró que la competencia correspondía al Juzgado de Instrucción núm. 25 de Madrid, exponiendo la necesidad de interpretar las normas con forme a la realidad social, considerando que la conducta típica cometida por el acusado no supuso una manifestación de posición de dominio ni de supremacía que ha de concurrir para estar ante un acto de violencia de género, apoyando la exposición de la Magistrada.

Por lo que esta parte mantiene la postura expuesta por la Magistrada del Juzgado especializado y por el Ministerio Fiscal, oponiéndonos a la resolución emitida por la Audiencia Provincial de Madrid en la SAP 1891/2019, de 6 de junio, donde atribuye la competencia al Juzgado de Violencia sobre la Mujer núm. 5 de Madrid, por no atender a la inexistencia de un elemento subjetivo de lo injusto y atender el art. 87 TER LOPJ en su más estricta literalidad. Luego, a nuestro parecer será competente para conocer este asunto el Juzgado de Instrucción de Madrid, y en fase de enjuiciamiento el Juzgado de lo Penal, al no poder considerarse la violencia de género como automática y la obligatoriedad de valorar el caso concreto en el que nos encontramos y su intencionalidad, sin observar atisbo alguno de violencia, ya que el Sr. Hernández jamás maltrató a su mujer, pudiendo atribuirle únicamente el hecho de ayudarle a morir dignamente, estando muy lejos de cualquier acto de violencia machista sin poder por lo tanto atribuirse el caso al Juzgado de Violencia sobre la Mujer.

⁴ Asimismo sostienen esta postura la Asociación de Mujeres Juristas Themis, así como la Asociación Mujeres, entre otras, quienes afirman que: *“no estamos en presencia de ningún hecho de violencia de género, no encaja en ninguna de las modalidades ni física, ni económica ni psicológica”*. Además hacen constar su preocupación por la estigmatización que Ángel Hernández pueda sufrir y la necesidad de regulación de la eutanasia para evitar problemáticas como el del caso que nos ocupa. Consultado en septiembre de 2019: <http://observatorioviolencia.org/el-caso-de-angel-y-maria-jose-pasa-a-un-juzgado-de-violencia-de-genero/>

2.- CALIFICACIÓN DEL TIPO DELICTIVO DEL DELITO DE COOPERACIÓN AL SUICIDIO.

2.1.- Tipo básico.

En este tipo de casos el umbral del tipo delictivo es bastante amplio y conviene analizar bien los hechos acaecidos ya que la respuesta penal puede ser muy diferente yendo desde la falta de tipicidad, hasta la eutanasia u homicidio imprudente o doloso. En este caso concreto a nuestro representado se le acusa de un delito de cooperación al suicidio tipificado en el artículo 143 del Código Penal dentro del Título I del Homicidio y sus formas.

Por lo que a continuación pasamos a analizar⁵ el artículo 143 del Código penal por el que se le acusa al demandado, el cual establece lo siguiente:

“1. El que induzca al suicidio de otro será castigado con la pena de prisión de cuatro a ocho años”. La característica de la inducción es que sólo podrá entenderse producida cuando se dirija a una persona que no ha decidido suicidarse por ella misma (STS 384/1986, de 15 de marzo), por lo que no es de aplicación al siguiente caso al existir la voluntariedad en la Sra. Carrasco desde hace mucho antes del momento de su muerte, pidiéndole a su marido que le ayudara a morir.

“2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años al que coopere con actos necesarios al suicidio de una persona”. En este caso se entenderá que alguien coopera cuando preste auxilio a otra persona que ya está decidida a suicidarse para que lo pueda llevar a cabo. Al contrario de lo que se señala en el apartado primero, que es la persona quien induce al suicidio, y no por voluntad de la víctima como es este el caso, en el que se castiga únicamente la cooperación de actos necesarios, manteniendo el dominio de los hechos la persona suicida. En este tipo delictivo puede cometerse el delito procurando los medios para cometer el suicidio o proporcionando consejos al suicida, por ejemplo. El cooperador únicamente coopera en la consecución de la voluntad del suicida, que es quien ejecuta el hecho (SAP Girona 184/2001 de 23 de marzo).

⁵ VELA MOURIZ, A., « ¿Cómo se regula en España la ayuda al suicidio y la eutanasia?», Noticias Jurídicas, 2019. <http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13862-iquest;como-se-regula-en-espana-la-ayuda-al-suicidio-y-la-eutanasia/>.

“3. Será castigado con la pena de prisión de seis a diez años si la cooperación llegara hasta el punto de ejecutar la muerte”. Estaremos ante el tipo delictivo del apartado tercero en el caso de que la cooperación, de la que hemos hablado con anterioridad, llegará hasta el punto de ejecutar la muerte del otro. El cooperador lleva a cabo de su propia mano la muerte de la persona que había decidió quitarse la vida, se conoce también como homicidio consentido.

“4. El que causare o cooperare activamente con actos necesarios y directos a la muerte de otro, por la petición expresa, seria e inequívoca de éste, en el caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que conduciría necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes y difíciles de soportar, será castigado con la pena inferior en uno o dos grados a las señaladas en los números 2 y 3 de este artículo”. Este último apartado del art. 143 CP es un tipo privilegiado en relación con los apartados dos y tres, recoge una atenuación o rebaja de la pena en uno o dos grados para la cooperación al suicidio en caso de que la víctima sufriera una enfermedad grave que condujera necesariamente a su muerte, o que produjera graves padecimientos permanentes o difíciles de soportar, siempre que exista una petición expresa e inequívoca del enfermo, a este hecho se le conoce como “eutanasia activa directa”.

Al estar ante un tipo delictivo que recoge la cooperación al suicidio es necesario que la persona que decide quitarse la vida sea plenamente consciente y tome la decisión de manera libre, de lo contrario estaríamos ante un homicidio.

Respecto al caso que nos ocupa, éste no encajaría en el tipo delictivo de homicidio ya que la Sra. Carrasco tenía voluntad de morir y así lo había decidido libre y conscientemente, por lo que nos encontramos ante una muerte querida, en el que el Sr. Hernández se ve involucrado a petición de su mujer debido a su incapacidad física.

Además la Sra. Carrasco es quien mantiene en todo momento el dominio del hecho⁶, ya que como se puede comprobar en los videos que grabaron ambos antes y durante el momento de su muerte, su cónyuge le pregunta si desea morir, como tantas veces le había dicho, a lo que ella responde que “sí, cuanto antes”. Preparando después

⁶ Véase ROMEO CASABONA, C.M.: Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relativos a la manipulación genética. Comares, Granada, 2004, p.99, quien establece que si tras la contribución del tercero el suicida tiene posibilidad de arrepentirse y detener el proceso que conduce a la propia muerte mantendrá el dominio del hecho y cabe hablar de suicidio, y no de homicidio consentido o a petición, recordando la importancia de prolongar el consentimiento hasta el final.

todo para el día siguiente, existiendo la posibilidad de que la Sra. Carrasco se echara para atrás en cualquier momento arrepintiéndose, no bebiéndose la sustancia, dejando de beber de la misma, o pidiendo auxilio una vez culminado tal hecho, siendo dueña de su propia decisión hasta el último momento, bebiendo ella misma con ayuda de una pajita, de manera consciente y libre, de la sustancia que compró hace tiempo cuando disponía de movilidad en los brazos, manteniendo por lo tanto el dominio del hecho hasta el final.

También hay que tener en cuenta las condiciones en las que se encontraba la Sra. Carrasco, quien era totalmente dependiente y no tenía apenas movilidad en el cuerpo. Por lo que en atención a sus circunstancias y limitaciones mantuvo el dominio de los hechos acaecidos con respecto a sus posibilidades, cooperando su marido en lo estrictamente necesario y en lo que ella no se valía por sí misma, pero es la Sra. Carrasco quien bebe de manera autónoma, libre y voluntariamente de la sustancia que le quita la vida.

Por lo que se descarta la tipificación del apartado primero en el que se exige la inducción al suicidio y nos movemos dentro del apartado segundo del art. 143 del CP, al entender que el Sr. Hernández cooperó en el suicidio de su mujer al ayudarlo con actos necesarios preparándole la sustancia y ofreciéndole el vaso con la sustancia que le quitaría la vida a la Sra. Carrasco.

Entendemos además que tampoco es de aplicación el apartado tercero porque la Sra. Carrasco es poseedora del dominio del hecho hasta el final, es ella quien decide libre y voluntariamente quitarse la vida y el momento en el que desea hacerlo; de manera que su marido únicamente le ayuda a culminar el hecho preparándole la sustancia que necesita para acabar con su sufrimiento, sin llegar a ejecutar él su muerte. Por tanto, a pesar de la incapacidad física que presenta y las dolencias que le acompañan, la Sra. Carrasco presenta intacta su capacidad de obrar y es ella quien bebe del vaso con la ayuda de una pajita, estando presente en ese simple acto la autonomía de la paciente y del propio acto que tiene como resultado su muerte, siendo dueña en todo momento de la situación y plenamente consciente de las consecuencias que conlleva.

Asimismo, es indudable que es de aplicación la atenuante contenida en el apartado cuarto de este tipo delictivo al cooperar el Sr. Hernández en la muerte de su mujer por petición expresa de ésta, debido a la sintomatología de su enfermedad que llevaba padeciendo desde hace más de treinta años, causándole graves dolores difíciles de soportar e incapacitándola para realizar cualquier acto de la vida cotidiana por sí misma, siendo totalmente dependiente de su marido, motivo por el que decide no querer seguir viviendo en esas condiciones.

Entrando a valorar únicamente el tipo delictivo que nos ofrece el Código Penal, y sin entrar a profundizar más en los hechos acaecidos, de primeras nos encontraríamos ante un delito de cooperación al suicidio tipificado en el artículo 143.2 que es castigado con una pena de prisión de dos a cinco años, a la que se le debe de aplicar la pena inferior en uno o dos grados, en virtud del art. 143.4 del CP. Moviéndonos en un umbral de 1 año a 2 años y un día de prisión, en caso de que se aplicara la pena inferior en un grado, y de 6 meses a 1 año menos un día de prisión, en caso de rebajarse la pena en dos grados.

2.2.- Atenuantes.

Además de la atenuante contenida en el artículo 143.4 del Código Penal, encontramos otras que son de aplicación en este caso.

En primer lugar, entendemos que concurrirá la atenuante por confesión contenida en el artículo 21.4⁷ del Código Penal que establece que será de aplicación cuando el culpable confiese la infracción cometida a las autoridades antes de conocer el tipo de procedimiento judicial que se dirige contra él.

Así, en el caso que nos ocupa, el Sr. Hernández fue quien llamo al Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid para que asistieran a su mujer, confesando desde el primer momento a las autoridades los hechos sucedidos y dejando a su disposición los videos que grabó junto a ella para que no hubiera ninguna duda de cómo se habían producido los hechos.

⁷ Art. 21.4. del CP: “La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades”.

Siendo, por lo tanto, de total aplicación la atenuante de confesión del art. 21.4 del CP para el caso del Sr Hernández, considerando la misma como muy cualificada en virtud de la STS 708/2014 de 6 de noviembre, que afirma que la intensidad atenuatoria se ha de revelar con especial consistencia fáctica, derivada de hechos, circunstancias o comportamientos que resulten un esfuerzo de la misma, merecedor de una mayor disminución de la pena, circunstancias que se dan en el presente caso, al no ocultar el Sr. Hernández su participación en el suicidio de la Sra. Carrasco, facilitando todas las pruebas a las autoridades y pudiendo haber urdido una trama que le inculpara de los hechos acaecidos, no llevándola a cabo.

Asimismo, es de aplicación la atenuante de parentesco contenida en el art. 23⁸ del Código Penal, que da la posibilidad de atenuar o agravar la responsabilidad del imputado por haber sido cónyuge o persona que esté ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, entre otros, en función de la naturaleza, los motivos y los efectos del delito.

En este sentido, la STS 147/2004 de 6 de febrero establece que *“la justificación del incremento de la pena se encuentra en el plus de culpabilidad que supone la ejecución del hecho delictivo contra las personas unidas por esa relación de parentesco o afectividad que el agresor desprecia, integrándose la circunstancia por un elemento objetivo constituido por el parentesco dentro de los límites y grado previsto, y el subjetivo que se concreta en el conocimiento que ha de tener el agresor de los lazos que le unen con la víctima, bastando sólo ese dato y exigiéndose una concurrencia de cariño o afecto porque como tal exigencia vendría a hacer de imposible aplicación la agravante pues si hay afecto, no va a haber agresión, salvo los supuestos de homicidio “pietatis causa” en los que el parentesco podría operar como circunstancia de atenuación”*.

Por su parte, la STS 320/2003, de 13 de marzo, considera que *“será un atenuante precisamente cuando la misma convivencia disminuye la gravedad del hecho, o incluso será inocua cuando se trate de un suceso extraparental, ajeno a la relación, o exista provocación previa por parte del sujeto pasivo”*.

⁸ Art. 23 del CP “Es circunstancia que puede atenuar o agravar la responsabilidad, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser o haber sido el agraviado cónyuge o persona que esté o haya estado ligada de forma estable por análoga relación de afectividad, o ser ascendiente, descendiente o hermano por naturaleza o adopción del ofensor o de su cónyuge o conviviente”.

En este caso consideramos que el artículo 23 del CP se debe de aplicar como circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante, atendiendo a las circunstancias concretas del caso, ya que el demandado, cónyuge de la Sra. Carrasco cooperó en el suicidio de ésta por petición reiterativa y expresa de su mujer; pues debido a su enfermedad se quería quitar la vida por no soportar los dolores y condiciones de vida que le provocaba la misma, por lo que el Sr Hernández decidió ayudarle a culminar su deseo como muestra de amor por ella al comprender que no quisiera seguir viviendo en esa situación que le ocasionaba tanto padecimiento y dolor.

El Sr. Hernández nunca ha tenido intención de acabar con la vida de su mujer, sino todo lo contrario, su prioridad ha sido siempre que estuviera bien atendida y hacerle su vida lo más cómoda y llevadera posible, cuidándola desde que le diagnosticaron esclerosis múltiple. Salvándola cuando al principio de su enfermedad la Sra. Carrasco se intentó suicidar cuando aún disponía de autonomía propia, y prometiéndole éste que le ayudaría a morir si llegado el momento era cierto que debido a su enfermedad mantenía su deseo de poner fin a su vida y ella no era capaz de realizar este acto por si misma porque su enfermedad se lo impedía.

Por lo que respecto del Sr. Hernández casi puede afirmarse que se encontraba ante una obligación moral y un “deber marital” de ayudar a su mujer en su reiterado afán de poner fin a una vida que tanto sufrimiento le causaba. Después de más de treinta años de cuidar a su mujer, ésta se sentía incapaz de seguir viviendo ante la decadencia de su enfermedad y la nulas expectativas de futuro, ya que solo podía ir a peor, siendo la Sra. Carrasco incapaz de llevar a cabo el suicidio sin contar con la ayuda de su marido del que dependía totalmente, sintiéndose el Sr. Hernández con la obligación de ayudarla al no aguantar verla vivir con tal sufrimiento, mereciendo un reproche menor del que generalmente procede.

Es semejante al caso que nos ocupa la SAP Zaragoza 85/2016, de 19 de abril, donde se condena a D. Ignacio S. O., como autor responsable de un delito de auxilio al suicidio, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de responsabilidad criminal muy cualificada de confesión y la atenuante de parentesco, por haber ayudado a morir a su madre.

2.3.- Calificación del tipo delictivo en el caso de estudio.

Pese a la tipificación y análisis que se hace del art. 143 del Código Penal, con razón de haber sido acusado del delito de cooperación al suicidio, esta parte entiende que el Sr. Hernández es inocente y que procede su libre absolución por todos los argumentos que se esgrimirán, a continuación, en el apartado tercero.

Subsidiariamente entendemos que nos encontramos ante un delito de cooperación al suicidio tipificado en el artículo 143.4 del Código Penal, en relación con su apartado segundo, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal muy cualificada de confesión del art 21.4 del CP y la atenuante de parentesco del art. 23 del CP en concepto de cooperador necesario en relación con los artículos 28⁹ y 27¹⁰ del Código Penal que establecen la responsabilidad criminal, dándole la entidad de autor el mencionado art. 28.b) del CP si entendemos que ha cooperado con actos necesarios al suicidio de su mujer.

Siendo además, el autor del suicidio la persona que atenta contra su propia vida, limitándose el cooperador ex artículo 143.2 a prestar auxilio al hecho principal, como es este el caso (SAP de Girona 184/2001 de 23 de marzo).

Por tanto, nos situamos ante una pena abstracta de 2 a 5 años a la que se le ha de aplicar la pena inferior en uno o dos grados en virtud del artículo 143.4 del CP, y a la resultante será de aplicación el art. 66.1.2^a, en el que se establece que cuando concurren dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy cualificadas, y no concorra agravante alguna, como es este el caso al concurrir la atenuante de confesión muy cualificada y la de parentesco, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas circunstancias.

Por lo que se podrá solicitar la suspensión de la pena privativa de libertad en virtud del art. 80 del CP, al ser la misma inferior a dos años y no tener el Sr. Hernández antecedentes penales.

⁹ Art. 28 CP: “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado”.

¹⁰ Art. 27 CP: “Son responsables criminalmente de los delitos los autores y los cómplices”.

Pese a ello, esta parte entiende que es más adecuado hablar en este caso de complicidad, no siendo punible en este tipo delictivo, ya que solo se pena los actos de cooperación necesaria, como veremos en el siguiente apartado, aceptando la misma de manera subsidiaria, ya que se trata de una conducta accesorio a un hecho principal, el suicidio.

3.- ARGUMENTOS QUE PROPONEMOS ESGRIMIR EN DEFENSA DEL ACUSADO.

Como defensa del procesado mantengo que nuestro representado no ha cometido delito alguno y pido su libre absolución en base a los siguientes argumentos.

3.1. El derecho a la libertad individual, a la dignidad e integridad de la persona, así como el derecho a la disponibilidad de la propia vida.

El art. 15 de la CE establece *que “todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral”*, sin embargo al lado de este sentido positivo del derecho a la vida, existe un sector doctrinal que ve en el mismo un sentido negativo, que se identificaría con la libre renunciabilidad a este derecho, originando el derecho a una muerte digna, al cual esta parte se acoge.

Si bien el TC¹¹ ha excluido que el derecho a la vida comprenda el derecho a poner fin a la propia existencia, no obstante afirma que “siendo la vida un bien de la persona que se integra en el círculo de su libertad, puede aquella fácticamente disponer sobre su propia muerte”, por lo que como es lógico existe la facultad o libertad de morir, pues no se puede obligar a alguien a seguir viviendo, no cabe deducir ningún “deber de vivir”.

¹¹ Véase la STC 120/1990, de 27 de junio.

Así pues el derecho a la disponibilidad¹² de la propia vida se fundamenta en el derecho constitucional a la libertad, regulado en el art. 17.2 de la CE, desprendiéndose del mismo la necesidad de respeto a la autonomía individual, consagrada también en el art. 10 de la CE que expresa la protección del libre desarrollo de la personalidad. Deduciendo de todo ello que no han de caber intromisiones en los actos de disposición de la propia vida.

Además, el reconocimiento constitucional de la dignidad de la persona implica primordialmente la concepción de calidad de ser humano por el simple hecho de serlo¹³ y tal y como establece QUERALT JIMÉNEZ “el núcleo esencial del hombre es la posibilidad de ejercer su libertad”¹⁴. De forma que cualquier ordenamiento que ignorará los derechos que emanan de la condición humana carecería de legitimidad, pese a su legalidad.

De manera que todos los derechos consagrados en este texto constitucional obligan a todos los poderes públicos a su respeto y protección, tanto el derecho a la vida, como la prohibición de tratos inhumanos o degradantes, la protección de la integridad física y moral, el libre desarrollo a la personalidad, o el derecho a la libertad de ideas y creencias, sirviendo la dignidad humana (art.10, CE) de base para todos estos derechos fundamentales, interpretándose el derecho a la vida con arreglo a este valor.

Por lo que la “vida” protegida por la Constitución no es la vida como mera existencia física-biológica, sino que ha de ser siempre una vida digna, es decir adecuada con el modo general de vivir humano¹⁵.

¹² MENDES DE CARVALHO, G., *Suicidio, eutanasia y Derecho penal. Estudio del art. 143 del Código Penal español y propuesta de lege frenda*, Comares, Granada, 2009, p. 127-161.

¹³ MENDES DE CARVALHO, G., *Suicidio, eutanasia...*, p.173-180; en la misma línea véase asimismo ROMEO CASABONA, C.M.: *El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1994, p. 44.

¹⁴ QUERALT JIMÉNEZ, J.J. «La eutanasia: perspectivas actuales y futuras». ADPCP, t. XLI, fasc. I, pp.115-135, 1988.

¹⁵ Véase MARTINEZ MORÁN, N. «El derecho a la vida en la Constitución Española de 1978 y en Derecho comparado: aborto, pena de muerte, eutanasia y eugenesia». *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, núm. 2, pp. 133-182, 1979, p. 147 y ss.

Es posible sostener la existencia de un derecho a disponer de la propia vida con arreglo a la dignidad de la persona entendida en su sentido más clásico, es decir, como autonomía del ser humano para tomar sus propias decisiones, incluyéndose en el concepto de vida la dignidad de la persona y en esta última a su vez, la libertad y la autonomía moral de la misma¹⁶, estando todas aunadas entre sí.

De ello se puede deducir que al entenderse el derecho a la vida a la luz de la dignidad humana, cuando esta se vulnera irremediablemente la vida pierde su sentido como tal, al menos su sentido humano, por lo que la vida no se reduce a una mera existencia física, sino que habrá que tener en cuenta que la misma se desarrolle con ciertos niveles de “calidad”.

Extrapolando lo mencionado al caso de la Sra. Carrasco se entiende que debido al cuadro médico que presentaba, precisando de la ayuda de los demás para realizar las actividades más básicas de la vida diaria como podría ser asearse, vestirse o alimentarse, sus condiciones de vida distaban mucho de lo que se espera de una adecuada calidad de vida que debe de tener cualquier ser humano, estando muy lejos de disponer de las condiciones básicas vitales que se esperan, sin poder desarrollarse con normalidad.

La Sra. Carrasco presentaba fortísimos dolores difíciles de soportar para los que precisaba la ingesta de diversos y variados medicamentos, pero que pese a los mismos seguía sin poder realizar una vida normal, siendo únicamente atenuantes del fuerte dolor físico que padecía, dependiendo para todo los actos de la vida de su marido, desarrollando su día a día postrada en la cama, con problemas de movilidad, alimentándose con dificultad y siendo atendida por el Sr. Hernández para todo aquello que precisara, ya que por sí misma era incapaz de realizar nada.

Ante esta situación, la Sra. Carrasco llevaba años queriéndose quitar la vida, pues no la consideraba digna para su persona, ya que pasaba los días en un lamento, distando mucho su día a día de una vida desenvuelta con normalidad y de un estado vital óptimo y deseable, pues llega un punto en el que la enfermedad te anula y no puedes hacer otra cosa más que sobrevivir a la misma.

¹⁶ Véase BUENO ARÚS, F. «El rechazo del tratamiento en el ámbito hospitalario». AP, núm. 31, pp.395-406, 1991, p. 396.

Esta parte entiende, al igual que proclamó la Sra. Carrasco en reiteradas ocasiones, que la situación en la que se encontraba no contaba con la calidad y bienestar que se presume de cualquier vida humana, obligándole nuestro ordenamiento jurídico a seguir con vida al no ofrecerle ninguna alternativa para que pudiera poner fin a su propia vida, ya que por sí misma no disponía de los medios ni la capacidad para llevar a cabo tal acto.

De manera que se estaba atentando contra su derecho a la libertad (art. 17.2 CE), a disponer de su propia vida, contra su derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 10 CE) y a la propia autodeterminación; así como una vulneración del derecho a la dignidad humana (CE), pues Doña María José había manifestado reiteradamente su deseo de poner fin a su vida, acto que ella no podía culminar debido a su discapacidad, viéndose obligada a vivir en contra de su voluntad, pese a que, como hemos mencionado con anterioridad no se puede obligar a nadie a seguir viviendo, ya que el derecho a la vida consagrado en el art. 15 de la CE se entiende como un derecho y no como una obligación, disponiendo cada uno de la facultad de desarrollar su vida como así consideré, incluso si eso implica el querer quitarse la vida, estando dentro de la esfera privada de la persona, teniendo plena libertad para disponer cada individuo de su propia vida.

Así pues, para esta parte se hace constar la situación en la que se encontraba la Sra. Carrasco, viendo mermados diversos derechos fundamentales consagrados en nuestra constitución como elementales para el desarrollo de una persona, quedando totalmente justificada la facultad y libertad con la que contaba la Sra. Carrasco para disponer de su vida y por ende, de su propia muerte, siendo totalmente legítima y, estando completamente justificada y dentro del sentido común, la decisión que esta misma tomó, pues la mencionada contaba con plenas facultades mentales y fue plenamente consciente de la decisión que estaba asumiendo y de sus consecuencias, en todo momento.

3.2.- La despenalización del suicidio en relevancia con la imposibilidad física de causar tu propia muerte y la importancia del dominio del hecho.

Como hemos mencionado con anterioridad, el Tribunal Constitucional se pronuncia sobre el derecho a la vida y a la propia muerte en la STC 120/1990, de 27 de junio, en relación con el art. 15 de la CE, sin llegar a considerar que el derecho a la vida comprenda el derecho a poner fin a la propia existencia.

Lo que manifiesta este Tribunal es la disposición de la propia muerte de cada persona, integrándose dentro del círculo de su libertad. De lo que se subyace la no prohibición de la privación de la vida propia y la aceptación de la propia muerte. En ningún modo se puede considerar como un derecho subjetivo que implique la posibilidad del poder público para vencer la resistencia que se oponga a la voluntad de morir¹⁷.

Según el TC, la decisión de arrostrar la propia muerte no se puede considerar como un derecho, sino más bien como una facultad o una libertad genérica, de forma que el suicidio ha dejado de ser considerado contrario a Derecho, dado que desde que nace el ser humano es indudable que dispone de total libertad para poner fin a su propia vida sin poder penalizarlo por culminar tal acto o ni si quiera por intentarlo¹⁸.

De tal manera que el art. 15 de la CE no incluye el derecho a morir pero si la libertad del individuo para poner fin a su propia vida, siendo una manifestación de la libertad de obrar que tiene el ser humano, reputado como un acto no prohibido conforme el ordenamiento jurídico.

Por lo que la Sra. Carrasco debería de disponer de total libertad para poner fin a su vida, casuística que no se daba debido a la imposibilidad física que le ocasionaba su enfermedad siendo totalmente dependiente de su marido, desprovista así de muchos derechos fundamentales vistos con anterioridad, ayudándole el Sr. Hernández en todo

¹⁷ MENDES DE CARVALHO, G., *Suicidio, eutanasia...*, p.152 y 153.

¹⁸ MENDES DE CARVALHO, G., *Suicidio, eutanasia...*, p.154 y ss.; véase asimismo PÉREZ ROYO, J. *Curso de Derecho constitucional*, 8 ed. Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid/Barcelona, 2002, p.335 y ss., quien establece que: “La libertad se traduce en que nadie puede ser penalizado por intentar poner fin a su propia vida. El derecho supondría que el individuo podría recabar auxilio para poner fin a su vida o podría oponerse a la acción de terceros, fueran poderes públicos o personas privadas, que intentaran evitar que se hiciera real y efectiva la voluntad de poner fin a la propia vida”

lo necesario para que no se vieran mermados estos derechos ni la facultad de disponer de su vida, debiendo ayudarle en este caso a preparar el pentobarbital sódico para que se quitara la vida sin ver mermadas sus facultades, como solía hacer con el resto de actividades diarias, no siendo este hecho menos legítimo que el resto.

Pese a la circunstancia de la Sra. Carrasco, nos encontramos ante un suicidio libre, en el que actúa con plena capacidad de entendimiento y juicio respecto a su decisión, la cual llevaba meditando durante años, siendo totalmente clara e inequívoca y estando totalmente justificada por su estado de salud, en el que las medidas terapéuticas suponen solo una prolongación de la vida biológica sin ninguna expectativa racional de recuperación y una mejora de vida, siendo su única opción una vida llena de sufrimiento.

Esta parte entiende que Doña María José fue quien tuvo el pleno dominio del hecho hasta el final, siendo ella misma la autora de su propio suicidio, pues ella fue quien tomó la decisión de quitarse la vida libre y voluntariamente, comprando ella la sustancia cuando disponía de movilidad en los brazos, ejerciendo su derecho a la disponibilidad de su propia vida y a la autonomía individual, decidiendo ella cuando quería suicidarse y en qué momento, bebiendo por sus propios medios y con plena libertad y facultad de la sustancia que le produciría la muerte, pudiendo haberse arrepentido y detenido el proceso no habiendo bebido de la pajita o dejando de beber de la misma o incluso pidiendo auxilio una vez que tragó la sustancia¹⁹.

Determinando este dominio del hecho, entendemos que le corresponde la autoría del suicidio única y exclusivamente a la Sra. Carrasco al ostentar el dominio de toda la acción, pese al auxilio que evidentemente necesita para ver satisfecha su voluntad.

Además, se demuestra que es un suicidio libre por su participación activa, quedando constancia en los videos que grabó antes y durante el momento de su muerte donde plasmó su voluntad de morir cuanto antes, y donde se puede ver que es ella quien bebe del vaso que contiene la sustancia que le quitará la vida con la ayuda de una pajita, siendo plenamente consciente de las consecuencias que conllevaría tal acto, ya que su capacidad natural de juicio no se vio afectada.

¹⁹ MENDES DE CARVALHO, G., *Suicidio, eutanasia...*, p. 240-241 y 332.

Por lo que al encontrarnos ante un suicidio libre no existe conducta punible alguna, ya que es una decisión que se encuentra dentro de la libre disposición y la autonomía individual de cada uno.

Además, el bien jurídico protegido en este caso es la vida, pero, como hemos mencionado anteriormente, su vida ya no contaba con el mismo valor, pues la vida humana no se puede entender únicamente como una mera existencia física o biológica, sino que consiste en una realidad que debe ser interpretada a partir de una concepción normativa, es decir, con arreglo a valores, como la dignidad de la persona y la libertad individual, y la vida de la Sra. Carrasco se veía mermada de toda la calidad humana que se presupone y, a su propio parecer, ya no era digna de ser vivida, no habiendo expectativa alguna de que mejorase, sino todo lo contrario.

Pasando a tener la Sra. Carrasco una concepción negativa de la vida, siendo su propia vida lo que le causaba el daño y el sufrimiento y encontrando en una muerte digna, el alivio, paz y descanso que tanto anhelaba, siendo su voluntad la de poner fin a su vida.

Así pues, se podría entender que no hay ningún bien jurídico dañado, y por lo tanto ningún hecho punible.

Siendo el único aspecto discutible la ayuda que le ofrece su marido para poder poner fin a su vida por petición expresa de la misma, comportamiento que pasamos a analizar a continuación.

3.3.- Pietatis Causa. Deber ético y moral de ayudar a su mujer.

Al Sr. Hernández se le acusa de un delito de cooperación al suicidio tipificado en el art. 143 del CP por lo que resulta necesario analizar exhaustivamente los hechos acaecidos y la conducta del acusado para comprobar si la misma es subsumible en este tipo penal.

Esta defensa parte de la base anterior de que el suicidio de la Sra. Carrasco fue un acto libre, al ser totalmente clara, inequívoca y persistente en el tiempo su petición de morir, teniendo plena capacidad de juicio sin verse mermada por su enfermedad y manteniendo el dominio del hecho hasta el final, estando dentro de su autonomía individual y de la libre disposición sobre su vida.

El único inconveniente con el que contaba la Sra. Carrasco era su imposibilidad de llevar a cabo tal acto por sí misma sin contar con la ayuda de un tercero, ya que su enfermedad le hacía totalmente dependiente y no podía realizar ningún acto sin contar con la ayuda de marido.

De manera que el Sr. Hernández era quien le ayudaba en su día a día a realizar todos los actos necesarios de la vida, y a quien le había manifestado en reiteradas ocasiones su deseo de poner fin a su sufrimiento con una muerte digna para lo que necesitaba su ayuda, ya que por sí misma era incapaz.

Tas varios años escuchando esta petición por parte de la Sra. Carrasco el Sr. Hernández tuvo que sucumbir a la misma, al entender que era la voluntad de su esposa y lo que realmente quería, estando en su derecho de disponer de su propia muerte al igual que puede hacerlo cualquier otra persona que dispone de plena autonomía, pues el único impedimento que tenía para alcanzar una muerte digna era su enfermedad que le hacía totalmente dependiente.

De esta manera tuvo que ayudar a su mujer a tener una muerte digna, preparándole la sustancia que le quitaría la vida como ella quería, sin olvidarnos de que fue ella quien la compró y bebió manteniendo el dominio del hecho en todo el momento, pero precisando la ayuda de su marido, al igual que la precisaba para el resto de actividades de su día a día.

Al final su marido era por así decirlo una extensión de sí misma, sin la cual no podría desenvolverse en su día a día, pues precisaba de su ayuda para todos los aspectos de su vida, por lo que la única manera que poseía la Sra. Carrasco de ver cumplida su voluntad y de tener un libre desarrollo de su personalidad era a través del Sr. Hernández, quien llevaba años cuidándola para que viviera lo mejor posible.

La finalidad del Sr. Hernández nunca ha sido poner fin a la vida de su mujer, sino todo lo contrario, cuidarla y hacer su vida lo más sencilla posible, asistiéndola y procurándole todos los medios y alternativas posibles para paliar los síntomas de la esclerosis múltiple, por lo que no se aprecia dolo ni se puede entender su conducta como mala o contraria a derecho, cuando lo único que hizo, una vez más, es asistir a su mujer para que pudiera llevar a cabo su voluntad, en este caso la de morir con dignidad.

Nos encontramos ante la figura “*pietatis causa*”²⁰ ya que es el sentimiento de cariño y respeto a la persona unida por la relación conyugal, y no el desprecio hacia ella, lo que llevó al procesado a ayudar a su mujer a poner fin a su vida, muerte encaminada a cumplir la voluntad de aquella para acabar con su sufrimiento y ejecutada como un acto de amor.

En el momento extremo en el que se encontraba la Sra. Carrasco de su enfermedad adolecía numerosos síntomas que le imposibilitaban para llevar una vida normal, sintiendo un constante dolor y sufrimiento, interpretando la muerte como un “bien” para sí misma que le liberaría de toda angustia, y no como un “mal”, provocando una inversión de las ideas más tradicionales acerca de la vida y la muerte²¹.

Siendo en este caso concreto más razonable su petición de morir que la de seguir viviendo en esas condiciones, actuando el Sr. Hernández atendiendo a la voluntad de su mujer y no a la suya propia, velando por sus intereses y preservando su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a su propia autonomía, y atendiendo a que no se viera mermado su derecho a la dignidad ni se viera sometida a tratos inhumanos o degradantes, acompañándola hasta el último momento.

²⁰ Véase la SAP núm. 85/2016 de 19 de abril.

²¹ GASCÓN ABELLÁN, M. «Problemas de la Eutanasia», Sistema, nº106, 1992, pp. 85-86.

Por lo que no se puede considerar al acusado como cooperador necesario²² del suicidio de la Sra. Carrasco, sino como un mero cómplice²³, cooperando en la ejecución del hecho con un acto anterior a la muerte preparándole la sustancia y acercándole la misma, pero siendo ella la que mantenía el pleno dominio del hecho bebiendo de la sustancia hasta el final con ayuda de una pajita y siendo consciente de las consecuencias, constituyéndose por lo tanto como autora de su propio suicidio, no pudiendo considerar al mismo como un coautor cuando lo único que realiza es un acto preparatorio por voluntad de su mujer, como llevaba años realizando para que la misma no viera mermado su derecho al libre desarrollo de la personalidad, a la libertad o a la autonomía individual.

Además, esta parte entiende que no estamos ante una cooperación necesaria, ya que la Sra. Carrasco tal vez se podría haber quitado la vida a través de otros medios, pero lo cierto es que ella deseaba poner fin a su vida en esas condiciones, siendo esa su voluntad y ayudándole su marido de esa forma, como venía haciendo desde que padecía la enfermedad. Por lo que no se puede entender su conducta como necesaria o imprescindible, sino que se debe de entender como un mero auxilio hacía su mujer, con el fin de que viera satisfecha su voluntad, al igual que hacía con el resto de tareas diarias siendo una extensión de la misma y ayudándole en todo lo que precisara, ya que nada es imprescindible con carácter general, y en el caso concreto todas las aportaciones resultan necesarias para la configuración del hecho en su manifestación concreta, pues la falta de algún hecho supondría ya un hecho diferente²⁴.

²² Artículo del CP: “Son autores quienes realizan el hecho por sí solos, conjuntamente o por medio de otro del que se sirven como instrumento. También serán considerados autores: a) Los que inducen directamente a otro u otros a ejecutarlo. b) Los que cooperan a su ejecución con un acto sin el cual no se habría efectuado.

²³ Artículo 29 del CP: “Son cómplices los que, no hallándose comprendidos en el artículo anterior, cooperan a la ejecución del hecho con actos anteriores o simultáneos”.

²⁴ ROMEO CASABONA C.M., SALA RECHE E., BOLDOVA PASAMAR M.A., *Derecho Penal. Parte General. Introducción Teoría Jurídica del Delito*. 2ª edición, Comares, 2016, p. 178.

Entendemos que la línea de diferenciación entre cooperación necesaria y complicidad es muy fina, siendo la clave para discernir una de otra en este supuesto el dominio del hecho y la voluntad de la Sra. Carrasco, ya que no se puede entender como necesario un acto de preparación de la ejecución motivado por la discapacidad que presentaba la Sra. Carrasco, dándole al acusado la entidad de autor, cuando evidentemente la autoría la ocupa la suicida, y lo más seguro es que hubiera encontrado otra forma de poner fin a su vida, no siendo esa su última voluntad.

Así pues no es subsumible la conducta que realiza el Sr. Hernández el día 3 de abril preparándole a su mujer pentobarbital sódico para poner fin a su vida, en el tipo delictivo del artículo 143 del CP, ya que la misma no se puede entender como un acto necesario, no teniendo por lo tanto la entidad de cooperación necesaria, sino de mera complicidad, no siendo punible la misma en nuestro ordenamiento jurídico, ya que lo único que se pena en nuestro código penal es la cooperación estrictamente necesaria al suicidio, que le da la entidad de autor al cooperador necesario.

No pudiendo considerar al Sr. Hernández como cooperador necesario, debiendo de entender los hechos anteriores o simultáneos como una mera complicidad con la suicida, y en caso de que existiera duda sobre la necesidad del auxilio que prestó el Sr. Hernández a su mujer, siendo éste factor lo que diferencia una de otra, no quedando suficientemente probada la cooperación necesaria, e existiendo dudas sobre la misma, se deberá de favorecer al acusado en virtud del principio jurídico *in dubio pro reo*.

Asimismo, esta parte entiende que tal conducta tiene plena inclusión en el estado de necesidad²⁵, contenido en el art. 20.5²⁶ del CP como una causa específica de la exclusión de la antijuridicidad, al darse los requisitos contenidos en dicho artículo y entender que el Sr Hernández actuó para evitar que su mujer siguiera sufriendo a causa de su enfermedad, la cual no aguantaba seguir viviendo con tal sufrimiento, ayudándole a poner fin a su vida de una manera digna.

²⁵ Véase MUÑOZ CONDE, F. *Derecho penal*, PE, 15 ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004, p. 76.

²⁶ Artículo 20.5 CP: “El que, en estado de necesidad, para evitar un mal propio o ajeno lesione un bien jurídico de otra persona o infrinja un deber, siempre que concurren los siguientes requisitos: Primero. Que el mal causado no sea mayor que el que se trate de evitar. Segundo. Que la situación de necesidad no haya sido provocada intencionadamente por el sujeto. Tercero. Que el necesitado no tenga, por su oficio o cargo, obligación de sacrificarse.”

Siendo en este caso el mal causado la muerte, de la cual se acostumbra a tener una connotación negativa, pero que en este caso concreto era la voluntad de la Sra. Carrasco y la única manera que encontraba de poner fin a su sufrimiento a causa de su enfermedad. Ocasionando el sufrimiento acaecido por su enfermedad, la cual vino de manera sobrevenida sin posibilidad de curación o mejora alguna, la situación de necesidad, debiendo de sacrificar su vida necesariamente para librarse de tal sufrimiento, sin existir otra alternativa factible.

Dándose los requisitos de certeza (enfermedad incurable y proximidad de su muerte), inmutabilidad (no existe posibilidad de curación), e imposibilidad (el sujeto ya no puede hacer nada por sí mismo, necesita asistencia total y constante por terceros) que MARTÍN GÓMEZ Y ALONSO TEJUCA²⁷ entienden como causa de justificación de la eutanasia activa directa.

Al final se trata de ponderar la protección de la dignidad humana e incluida en ésta la autonomía individual para decidir cuándo se quiere dejar de sufrir una situación que resulta insoportable por más tiempo y por otro lado, la tutela de la vida humana, la cual para esta parte está desprovista de valor, primando en este caso concreto la voluntad de la paciente, siendo totalmente razonable la postura que adopta la misma y su cónyuge actuando por el bien de su mujer y con el fin de que la misma deje de sufrir.

²⁷ Véase MARTÍN GÓMEZ, M./ALONSO TEJUCA, J.L. «Aproximación jurídica al problema de la eutanasia», núm.2, 1992, pp. 861-879.

3.4.- Proyecto de Ley sobre la aprobación de la Eutanasia.

Como hemos visto a lo largo de todo el trabajo, la Eutanasia en España no se encuentra legalizada, sino que la ley opta por recoger la eutanasia activa directa en el Código Penal, en su artículo 143.4, el cual ha sido objeto de estudio en el presente trabajo, y darle la consideración de atenuante muy cualificada, descartando su impunidad absoluta.

De lo que se aprecia la concepción de la misma como una circunstancia favorable para el acusado, despojándose de toda connotación negativa y estando cada vez más aceptada en la sociedad, pues si no se llega a aprobar o regular la misma es por el miedo existente a la cadena que pueda generar, produciendo una demanda masiva de dicha petición, así como su repercusión social y en lo relativo a un sector de la ética sanitaria que se opone, pero que nada influye en el presente caso.

De hecho, en mayo de 2018 se debatió en el Congreso de los Diputados una proposición de ley²⁸ (Proposición de Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. Presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. 122/000239. BOCG) para legalizar en determinados casos, la práctica del suicidio asistido y de la eutanasia e incluirlas como una prestación más en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, despenalizando la misma y regulándola, la cual no llegó a aprobarse. Presentando otra propuesta²⁹ en 2018, contando con los votos del PSOE, Podemos, PNV, ERC y PDeCAT, pero sin llegar a ser suficiente.

Además, en la legislación de Andalucía (Ley 2/2010, de 8 de abril, de derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de la Muerte), de Aragón (Ley 10/2011, de 24 de marzo, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona en el Proceso de Morir y de la Muerte), de Navarra (Ley Foral 8/2011, de 24 de marzo de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida), de Canarias (Ley 1/2015, de 9 de febrero, de Derechos y Garantías de la Dignidad de la Persona ante el Proceso Final de su Vida), de Baleares (Ley 4/2015, de 23 de marzo, de Derechos y Garantías de la Persona en el Proceso de Morir), de Galicia (Ley 5/2015, de 26 de junio, de Derechos y Garantías de la Dignidad de las Personas Enfermas

²⁸ GERMAN ZURRIARÁIN, R. «Aspectos sociales de la eutanasia.», *Cuadernos de Bioética*, 30 (98), 2019, p.24.

³⁰ REICAZ «Eutanasia, ¿De qué se trata? », VLEX-775446633.

Terminales), del País Vasco (Ley 11/2016, de 8 de julio, de Garantía de los Derechos y de la Dignidad de las Personas en el Proceso Final de su Vida) y de Madrid (Ley 4/2017, de 9 de marzo, de Derechos y Garantías de las Personas en el Proceso de Morir) no contemplan como tal el término de eutanasia, ya que la misma no se encuentra regulada, ahora bien estas legislaciones, especialmente la andaluza, se pueden considerar ya como la antesala de la Propuesta de Ley sobre la eutanasia, pues esta está vista como un derecho derivado de la autonomía del paciente, destinadas las mencionadas leyes autonómicas referentes a la muerte digna a favorecer en primer lugar la autonomía del paciente en el momento de tomar decisiones en el proceso final de su vida³⁰.

Por otro lado, en muchos países de Europa la Eutanasia ya está legalizada y se encuentra regulada, como ocurre en Alemania, Holanda, Bélgica o Luxemburgo.

Por lo que es cuestión de tiempo que se regularice en España y se pase a considerar como una conducta impune y no se tenga solo como una mera atenuante cualificada.

Así pues, definitivamente no podemos considerar que la petición que realiza la Sra. Carrasco o la conducta que lleva a cabo el Sr. Hernández para ayudar a su mujer se puedan considerar contrarias a derecho, estando socialmente aceptadas por la mayoría de los ciudadanos y entrando dentro de toda racionalidad y entendimiento común, de manera que si la ley de la eutanasia se aprobara antes de que llegara el juicio o de la sentencia, sería absuelto el acusado, sin lugar a dudas, aplicándole la ley más favorable.

³⁰ Véase GERMAN ZURRIARÁIN, R. «Aspectos sociales de la eutanasia.», *Cuadernos de Bioética*, 30 (98), 2019, p.23-34.

VII. CONCLUSIONES

A nuestro parecer, tal y como se ha puesto de manifiesto en el presente dictamen, solicitamos, y entendemos que le corresponde al Sr. Hernández, la libre absolución, al considerar a la Sra. Carrasco como autora de su propio suicidio, y al acusado como un mero cómplice, y no como un cooperador necesario como exige el tipo delictivo del art. 143 del CP, al no poder considerar el auxilio que le prestó a su mujer para ayudarle a morir dignamente como necesario, prestándole el mismo por no tener capacidad la Sra. Carrasco de realizarlo en esas condiciones por sí misma, y haciéndolo por petición de su mujer, comprendiendo que era su voluntad y lo único que le liberaría de su padecimiento.

Además, se debe poner de relieve nuevamente, que la Sra. Carrasco fue quien mantuvo el dominio del hecho hasta el último momento, ya que mientras bebía de la sustancia que le quitaría la vida con ayuda de una pajita pudo haberse arrepentido y no lo hizo, siendo plenamente consciente de lo que hacía, pues mantenía intacta su capacidad de obrar, tomando por sí misma de manera clara, inequívoca y persistente en el tiempo, la decisión de acabar con su vida debido al sufrimiento y dolor que le producía su enfermedad.

A su vez, entendemos que la Sra. Carrasco disponía de total facultad y libertad para morir, no pudiendo obligar a nadie a seguir viviendo, ejerciendo la misma su derecho a la disponibilidad de la propia vida, así como el derecho al libre desarrollo de la personalidad y a su propia autonomía, siendo comprensible la decisión que adoptó teniendo en cuenta las condiciones en las que se encontraba, estando desprovista de la calidad de vida que se presupone en cualquier ser humano y sin ninguna expectativa de mejora, sino todo lo contrario.

Sin que, por lo tanto, podamos considerar su vida como un bien jurídico dañado, al ser la propia vida la que le ocasionaba tal sufrimiento a la Sra. Carrasco, y la muerte la única posibilidad de encontrar paz y alivio, sin olvidarnos de que la Sra. Carrasco puso fin a su vida por su propia voluntad, de manera totalmente libre.

Quedando justificado el auxilio que prestó el Sr. Hernández a su mujer en el estado de necesidad del art. 20.5 del CP como una causa específica de la exclusión de la antijuridicidad, al darse los requisitos contenidos en dicho artículo y entender que el Sr. Hernández actuó para evitar que su mujer siguiera sufriendo a causa de su enfermedad.

*

Subsidiariamente, solicitamos que se tenga en cuenta el art. 143. 4 del CP como tipo privilegiado, en relación con el apartado segundo de este mismo artículo, al entender que el Sr. Hernández cooperó con actos necesarios en el suicidio de su mujer, y no solo como un mero cómplice, por petición seria e inequívoca de ésta, con motivo de su enfermedad, la cual le incapacitaba para realizar por si misma todos los actos de la vida, produciéndole graves dolores difíciles de soportar, estando en fase terminal de la enfermedad sin ninguna expectativa de mejora, moviéndonos en un umbral de 1 año a 2 años y un día de prisión, en caso de que se aplicara la pena inferior en un grado, y de 6 meses a 1 año menos un día de prisión, en caso de rebajarse la pena en dos grados.

Además, es de aplicación la atenuante por confesión muy cualificada contenida en el art. 21.4 del CP al confesar el Sr. Hernández a las autoridades los hechos acaecidos antes de conocer el tipo de procedimiento judicial que se dirigía contra él, y la circunstancia mixta de parentesco como atenuante del art. 23 del CP, al ser cónyuge de la Sra. Carrasco, y entender que auxilió a la misma en su suicidio como muestra de cariño hacía ella, estando ante un supuesto de “*pietatis causa*”. Debiendo de aplicarse el art. 66.1.2ª del CP al concurrir dos circunstancias atenuantes, y no concurrir agravante alguna, por el que se aplicará la pena inferior en uno o dos grado a la establecida por la ley, anteriormente mencionada, pudiendo solicitar la suspensión de la pena al ser inferior a dos años y no tener el Sr Hernández antecedentes penales (art. 80 CP).

*

A su vez, entendemos que en ningún caso deberá de conocer este asunto el Juzgado de Violencia sobre la Mujer, como establece la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid nº 1891/2019, al no apreciarse una relación de superioridad o relación de poder que ejerza el Sr. Hernández sobre su mujer, ni manifestación de discriminación alguna, como se requiere en la violencia de género, sin poder apreciar violencia de ningún tipo: ni sexual, ni psicológica, ni física.

Debiendo de valorar la intencionalidad con la que actuó el Sr. Hernández, al auxiliar a su mujer, única y exclusivamente por la voluntad expresada de forma seria e inequívoca de la misma, al comprender la situación en la que se encontraba y no poder culminar la Sra. Carrasco tal acto de manera autónoma, estando totalmente ligada su muerte al padecimiento que le ocasionaba su enfermedad y no a cuestiones machistas.

No pudiendo, por lo tanto, asignar el caso al Juzgado de Violencia de manera automática únicamente porque se dé el tipo delictivo entre un hombre y su mujer, asumiendo ésta el papel de víctima, sino que se deberá de atenderse al caso concreto y valorar si se dan los requisitos contenidos en la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género para valorar si son expresión de violencia de género o no, no concurriendo en el presente caso los mismos, siendo competente para conocer este asunto el Juzgado de Instrucción de Madrid, y en fase de enjuiciamiento el Juzgado de lo Penal.

*

Además, conviene traer a colación la línea legislativa a la que se está tendiendo, en la que la normativa autonómica se ve ya como la antesala de la Propuesta de Ley sobre la eutanasia, valorando la misma como un derecho de la autonomía del paciente, destinadas a favorecer en primer lugar la autonomía del paciente en el momento de tomar decisiones en el proceso final de su vida y favorecer una muerte digna, siendo cuestión de tiempo que se regularice en España y se pase a considerar como una conducta impune, y no se tenga solo como una mera atenuante cualificada, ya que existe, cada vez más, un sector de nuestra sociedad que la demanda, liberándose ésta conducta de todo reproche social que pudiera tener o hubiese tenido.

Así pues, entendemos que socialmente no es reprochable la conducta que realizó el Sr. Hernández ayudando a morir a su mujer dignamente, sino que más bien, entra dentro de toda racionalidad y entendimiento común, asumiendo que la realidad social en estos momentos se encuentra muy por delante de la realidad jurídica que plasma nuestro Código Penal. Teniendo en cuenta que si se aprobará la ley de la eutanasia que tanto se reclama antes de que tuviera lugar el juicio o la sentencia, sería absuelto el acusado, sin lugar a dudas, aplicándole la ley más favorable.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- BUENO ARÚS, F. «El rechazo del tratamiento en el ámbito hospitalario». AP, núm. 31, pp.395-406, 1991.
- Circular 4/2005, de 18 de julio, relativa a los criterios de aplicación de la Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la violencia de género. Referencia: FIS-C-2005-00004.
- GASCÓN ABELLÁN, M. «Problemas de la Eutanasia», Sistema, nº106, 1992, pp. 85-86.
- GERMAN ZURRIARÁIN, R. «Aspectos sociales de la eutanasia.», *Cuadernos de Bioética*, 30 (98), 2019, p.23-34.
- GERMAN ZURRIARÁIN, R. «Vulneraciones de la dignidad humana al final de la vida.», *Cuadernos de Bioética*, XXVIII, 2007/1ª.
- MARTÍN GÓMEZ, M./ALONSO TEJUCA, J.L. «Aproximación jurídica al problema de la eutanasia» LA ley, núm.2, pp. 861-879, 1992.
- MARTINEZ MORÁN, N. «El derecho a la vida en la Constitución Española de 1978 y en Derecho comparado: aborto, pena de muerte, eutanasia y eugenesia».
- MENDES DE CARVALHO, G., *Suicidio, eutanasia y Derecho penal. Estudio del art. 143 del Código Penal español y propuesta de lege frenda*, Comares, Granada, 2009.
- MUÑOZ CONDE, F. *Derecho penal*, PE, 15 ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2004
- Observatorio Violencia: <http://observatorioviolencia.org/el-caso-de-angel-y-maria-jose-pasa-a-un-juzgado-de-violencia-de-genero/>. Consultado en septiembre de 2019.
- PÉREZ ROYO, J. *Curso de Derecho constitucional*, 8 ed. Marcial Pons-Ediciones Jurídicas y Sociales, S.A. Madrid/Barcelona, 2002, p.335.
- ROMEO CASABONA C.M., SALA RECHE E., BOLDOVA PASAMAR M.A., *Derecho Penal. Parte General. Introducción Teoría Jurídica del Delito*. 2ª edición, Comares, 2016, p. 178.
- QUERALT JIMÉNEZ, J.J. «La eutanasia: perspectivas actuales y futuras». ADPCP, t. XLI, fasc. I, pp.115-135, 1988.
- REICAZ «Eutanasia, ¿De qué se trata? », VLEX-775446633. [Http://vlex.com/vid/775446633](http://vlex.com/vid/775446633). Consultado en octubre de 2019.

- *Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense*, núm. 2, pp. 133-182, 1979.
- ROMEO CASABONA, C.M.: «Los delitos contra la vida y la integridad personal y los relativos a la manipulación genética». Comares, Granada, 2004.
- ROMEO CASABONA, C.M.: *El Derecho y la Bioética ante los límites de la vida humana*. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1994.
- SERRANO RUIZ-CALDERON, J.M. «La cuestión de la eutanasia en España. Consecuencias jurídicas.», *Cuadernos de Bioética*, XVIII, 2007/1ª.
- VELA MOURIZ, A., « ¿Cómo se regula en España la ayuda al suicidio y la eutanasia?», *Noticias Jurídicas*, 2019.
<http://noticias.juridicas.com/actualidad/noticias/13862-iquet;como-se-regula-en-espana-la-ayuda-al-suicidio-y-la-eutanasia/>. Consultado en octubre de 2019.